



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2016-00375-00

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021)

**REFERENCIA:**

**EXPEDIENTE:** 11001-33-35-010-2016-00375-00

**DEMANDANTE:** JESÚS ENRIQUE CORONADO LEÓN

**DEMANDADO:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES  
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -  
UGPP

**MEDIO DE CONTROL:** EJECUTIVO

### **Reposición**

*El apoderado de la entidad ejecutada por medio de memorial visible a folios 80 a 82 del expediente, presenta Recurso de Reposición en contra del auto calendarado el 26 de abril de 2018 (fl. 63 a 71), en virtud del cual se procedió a librar mandamiento de pago a favor de JESÚS ENRIQUE CORONADO LEÓN y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.*

### **SUSTENTACIÓN DEL RECURSO<sup>1</sup>**

*El apoderado indica que la obligación cuya ejecución se pretende no es exigible, por cuanto el fenómeno de la caducidad operó respecto de la sentencia de 18 de marzo de 2009 proferida por este Despacho Judicial<sup>2</sup> y la cual cobro ejecutoria el 01 de abril del mismo año<sup>3</sup>, esto haciendo referencia el artículo 136 del C.C.A.*

### **CONSIDERACIONES**

*Antes de resolver de fondo el recurso de reposición presentado, es necesario precisar que a la luz de lo establecido en el artículo 438 del Código General del Proceso, el mismo es procedente.*

*Revisado el expediente, encuentra el Despacho que mediante auto de 26 de abril de 2018, se libró mandamiento de pago a favor de JESÚS ENRIQUE CORONADO LEÓN y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, teniendo como título ejecutivo la sentencia de 18 de marzo de 2009 proferida por este Juzgado dentro del proceso ordinario radicado No. 25000232500020050817901.*

*En cuanto al título ejecutivo se tiene que el artículo 297.1 de la Ley 1437 de 2011 establece que constituyen título ejecutivo "las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,*

---

<sup>1</sup> Folios 80 a 82

<sup>2</sup> Folio 3 a 14

<sup>3</sup> Folio 14 vto



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ  
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2016-00375-00

mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias."

Para estudiar las condiciones de que deben gozar los títulos ejecutivos el despacho considera pertinente citar la sentencia T-747/13 de la Honorable Corte Constitucional que al respecto señala:

"Los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación "(i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme." Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. **Es expresa cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación.** Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada."

(Negrilla fuera de texto).

Dicho lo anterior es dable concluir que es ejecutable la providencia que se encuentre debidamente ejecutoriada, que contenga una obligación expresa, esto es, que aparezca manifiesta de la redacción misma del título, en forma nítida, por un lado el crédito del ejecutante y por otro lado la deuda del ejecutado, sin que haya para ello que acudir a invenciones o suposiciones; que a su vez contenga una obligación clara sin lugar a equívocos por estar identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan; y que la obligación sea exigible por no estar pendiente un plazo o una condición.

En cuanto a la exigibilidad de la obligación, teniendo en cuenta que el fallo, cuya ejecución se pretende fue proferido en el año 2009, el Despacho da aplicación al Código Contencioso Administrativo, por ser la norma aplicable en ese momento. Siendo del caso realizar las siguientes precisiones normativas y jurisprudenciales:

1- El artículo 177 del C.C.A., dispuso que la obligación contenida en una sentencia judicial se hace exigible 18 meses después de la ejecutoria de la misma

2- El artículo 136 del mismo estatuto respecto a la oportunidad para solicitar la ejecución de la sentencia, señaló que "La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial."



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente No : 11001-33-35-010-2016-00375-00

3- Respecto a la suspensión del término de caducidad se tiene que por mandato legal, esta solo se da con la solicitud de conciliación extrajudicial y con la presentación de la demanda, sin embargo en providencia del Consejo de Estado, de 30 de junio de 2016, Magistrado Ponente Doctor William Hernández Gómez, se estudió la suspensión del termino de caducidad en forma especial o excepcional en las demandas ejecutivas instauradas en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales-UGPP, así:

*"El Decreto 254 de 2000 a través del cual se fija el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, en su artículo 6 literal d)<sup>4</sup> establece que el funcionario liquidador deberá "[...] Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiéndole que deben acumularse al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador [...]"<sup>5</sup>*  
(...)

Frente a la aplicación de esta norma al proceso de liquidación de la extinta CAJANAL, el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento señaló:

*"[...] Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue el Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual, en el inciso segundo de su artículo 1º, respecto de su ámbito de aplicación, consagró "...en lo no previsto en el presente decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad..."*

*Para esos efectos se expidió la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades de carácter privado, público o de economía mixta que ejerzan alguna actividad financiera y de ahorro y crédito, consagrando en el inciso segundo del artículo 14 que "...Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario [...]"* (Subraya fuera de texto).<sup>6</sup>

En suma, se concluyó que los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la entidad liquidada se suspendieron desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, fecha esta última a partir de la cual se reanudó el cómputo de los cinco (5) años de caducidad de las acciones ejecutivas contra aquella entidad. A esta conclusión también llegó esta Subsección de la Sección Segunda en reciente decisión<sup>7</sup>.

Pese a lo anterior, la suspensión de la caducidad no debe ser aplicada en similar forma a todos los créditos provenientes de condenas contra CAJANAL, hoy liquidada, ya que se presentan diferentes hipótesis con diversos supuestos fácticos que no habían sido analizados en las providencias anteriores, como se verá a continuación.

<sup>4</sup> Modificado por el artículo 6º de la ley 1105 de 2006.

<sup>5</sup> Función que se estableció para el caso específico de CAJANAL en el artículo 6 literal d) del Decreto 2196 de 2009.

<sup>6</sup> Ver entre otras: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda- Subsección "A". Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E), providencia de 25 de agosto de 2015, número interno 1777-2015, actor Rosa Ana Novoa de Pabón, demandado: UGPP y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda- Subsección "B". Consejero Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, providencia de 29 de marzo de 2016, número interno 5042-2015, actor Aidé Yolanda Cárdenas Corredor, demandado: UGPP

<sup>7</sup> Auto del dieciséis (16) de junio del dos mil dieciséis (2016). Expediente núm.: 25-000-23-42-000-2013-06593-01, Número Interno: 2823-2014, Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Actor: Hernando Torres Carreño.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2016-00375-00

Así las cosas, toda petición relacionada con el cumplimiento de una sentencia condenatoria en materia pensional radicada antes del 8 de noviembre de 2011, debía ser atendida y la sentencia tenía que ser cumplida por CAJANAL en Liquidación, en tanto que las presentadas con posterioridad correspondieron a la UGPP. En esta forma se resolvió recientemente un conflicto de competencias administrativas por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación<sup>8</sup>.

(...)

Así las cosas, si bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y Cuarta de esta Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió durante los cuatro (4) años que duró su trámite liquidatorio, ello solo resulta aplicable a aquellos casos con características especiales analizadas en ellos en los cuales se impidió que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación contra CAJANAL o la UGPP<sup>9</sup>.

Por el contrario, la anterior regla no puede ser aplicada frente a los fallos condenatorios ejecutoriados y/o cuyas peticiones de cumplimiento se radicaron con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, en tanto que:

(...)

De esta forma, es necesario que el juez identifique a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de medio de control se suspenderá sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL EICE y se reactivará:

- a- El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 o,
- b- Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía atender a CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, la reactivación será el 12 de junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

## CASO EN CONCRETO

La sentencia de 18 de marzo de 2009 (título ejecutivo) quedó ejecutoriada el día 1 de abril del mismo año, ejecutable a partir del 2 de octubre de 2010 (18 meses después de la fecha de ejecutoria de la sentencia), fecha a partir de la cual empezó a correr el termino para interponer acción ejecutiva (5 años), venciéndose el mismo el **2 de octubre de 2015** y habiéndose presentado el escrito de ejecución el **7 de julio de 2016** (visto en caratula interior).

Pese a lo anterior es del caso señalar que según lo dispuesto por el Consejo de Estado en cuanto a la suspensión del termino de caducidad para los procesos de ejecución que se adelanta contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

<sup>8</sup> Consejero ponente: AUGUSTO HERNÁNDEZ BECERRA, Bogotá D.C., dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-06-000-2014-00020-00(C). Actor: CARLOS JUAN CAICEDO MARCILLO.

<sup>9</sup> En efecto, se referían a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN que reconocían derechos pensionales y que fueron dictadas antes del 8 de noviembre de 2011; la reclamación de cumplimiento del fallo se hizo con anterioridad o en vigencia del proceso liquidatorio, pero en todo caso hasta el 8 de noviembre de 2011 y por tanto la competencia para su cumplimiento era de esta entidad y mientras duró el proceso liquidatorio en muchos casos no fue posible adelantar cobros ejecutivos y el propio liquidador negó su inclusión en la masa de acreedores.





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente No. 11001-33-35-010-2016-00375-00

GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia cuya ejecución se pretende fue anterior al 08 de noviembre de 2011, los términos de caducidad de la acción, se suspendieron desde el **12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013**, esto es, por espacio de cuatro (4) años, teniendo así el ejecutante hasta el **12 de junio de 2018** para solicitar la ejecutoria de la sentencia de 18 de marzo de 2009 ya referida, lo que ocurrió como ya se señaló el **7 de julio de 2016**, esto es, dentro del término.

En consecuencia, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,

**DISPONE:**

**PRIMERO:** NO REPONER el auto de 26 de abril de 2018, con el cual se libró mandamiento de pago a favor de JESÚS ENRIQUE CORONADO LEÓN y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP;

**SEGUNDO:** Se reconoce a JHON EDISON VALDÉS PRADA con cédula de ciudadanía No. 80.901.973 y Tarjeta Profesional No. 238.220 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado sustituto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP según poder visible a folio 83 y como apoderado principal a JOSÉ FERNANDO TORRES PEÑUELA con cédula de ciudadanía No. 79.889.216 y Tarjeta Profesional No. 122.816 del Consejo Superior de la Judicatura según escritura pública visible a folios 84 y 85.

**TERCERO:** Ejecutoriada la presente providencia devuélvase el expediente al Despacho para lo que sea pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARTHA HELENA QUINTERO QUINTERO  
JUEZ (E)

JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO  
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ  
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la  
providencia anterior hoy  
\_\_\_\_\_ a las 08:00 A.M.

LUIS ALEJANDRO GUEVARA BARRERA  
Secretario